

NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia
JUZGADO : 11° Juzgado Civil de Santiago
CAUSA ROL : C-9681-2021
CARATULADO : VELÁSQUEZ/CARACCI

Santiago, diecisiete de noviembre de dos mil veintidós.

Visto:

Que compareció doña **Myriam Margarita Velásquez Melo**, matrona, con domicilio en Chiu Chiu N°1796, departamento 204, comuna de Las Condes, quien dedujo demanda en juicio sumario de indemnización de perjuicios en conformidad al artículo 9° de la Ley N°18.287, en contra de doña **Ginnia Caracci Maraboli**, ignora profesión u oficio, domiciliada en calle San Benito N°9484, comuna de La Florida, en su doble calidad de responsable infraccional del accidente de tránsito y de propietaria del automóvil Placa Patente Única FCDW.67, solicitando se le condene a pagar la suma de \$7.000.000 (siete millones de pesos) más reajustes, intereses y costas.

Indicó que el 18 de noviembre de 2020, aproximadamente a las 17:00 horas, conducía el automóvil de su propiedad, placa patente única FRDV.70 por calle Alonso de Camargo en dirección al oriente y en la intersección con calle Alhué, colisionó con el automóvil placa patente única FCDW.67 manejado en forma culpable y descuidada por doña Ginnia Caracci Maraboli, quien transitaba por calle Alhué en dirección al sur, a velocidad excesiva para zona urbana, totalmente desatenta a las condiciones del tránsito del momento, sin respetar el signo pare que enfrentaba y sin ceder el derecho preferente de paso a mi vehículo.

Expuso que estos hechos originaron la causa rol N°1931-3- 2021 del Segundo Juzgado de Policía Local de Las Condes, en la que el Tribunal, con fecha 20 de septiembre de 2021, por sentencia definitiva, condenó a doña Ginnia Caracci Maraboli a pagar una multa equivalente en pesos a 3 UTM y a la suspensión de su licencia de conductor por 30 días, por ser autora de infracción a los artículos 108 inc. 1 y 2 y 140 inciso 1, del texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N°18.290 y responsable del accidente investigado.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: LXBDXCJHVJX

Agregó que la sentencia definitiva dictada por el Tribunal antes individualizado se encuentra ejecutoriada.

Citó la disposición del inciso 2º del artículo 169 de la Ley de Tránsito, que establece: *“El conductor, el propietario del vehículo y el tenedor del mismo a cualquier título, a menos que estos últimos acrediten que el vehículo fue usado contra su voluntad, son solidariamente responsables de los daños o perjuicios que se ocasionen con su uso...”*.

Así también, citó el artículo 2314 del Código Civil, norma que señala que *“El que ha cometido un delito o cuasidelito que ha inferido daño a otro, es obligado a la indemnización; sin perjuicio de la pena que le impongan las leyes por el delito o cuasidelito”*.

Señaló que la demandada al ser culpable del accidente de tránsito fundante de esta acción su conducción antirreglamentaria e ilícita es la causal basal del siniestro en comento, y su actuar infraccional es la consecuencia inmediata y necesaria de los daños y perjuicios ocasionados, a lo que se agrega que la demandada, antes individualizada, es también la propietaria del automóvil placa patente FCDW.67, por lo que debe indemnizarle los perjuicios ocasionados con motivo del accidente de tránsito en referencia.

Respecto de los perjuicios, señaló que como consecuencia del mencionado choque, éstos ascienden a la suma de \$7.000.000, de acuerdo a lo siguiente: **a)** daño emergente o directo: A raíz del impacto, el automóvil placa patente FRDV.70, sufrió cuantiosos daños en toda su estructura, cuyo valor de reparación asciende a la suma de \$6.500.000.- (seis millones quinientos mil pesos), según presupuestos, por cuanto resultaron dañados, entre otros: parachoques delantero, tapabarros delantero, frontal, focos delanteros, máscara, capot, ambos airbags, etc.; **b)** Desvalorización comercial: A consecuencia del choque el automóvil antes señalado, sufrirá una considerable merma en su valor comercial, desvalorización que, en la especie, se estima en la suma de \$ 500.000.- (quinientos mil pesos), ya que el móvil resultó totalmente descuadrado y, antes del accidente se encontraba en perfecto estado de conservación; **c)** Reajustes e intereses: Las cantidades antes expresadas deberán ser pagadas reajustadas de acuerdo a la variación que experimente el Índice de Precios al Consumidor



entre la fecha del choque y hasta la del pago efectivo y total, más intereses corrientes por el mismo período, con costas.

El 27 de diciembre de 2021 se llevó a efecto la audiencia de contestación y conciliación.

Mediante presentación de la misma fecha, la demandada contestó la demanda, solicitando su rechazo con expresa condena en costas.

Señaló que la demandante persigue una supuesta responsabilidad civil extracontractual por daños y perjuicios en su contra, limitándose a invocar una supuesta calidad de propietaria del vehículo materia de autos, sin existir fundamentación alguna respecto a la relación causal entre los hechos imputados y los supuestos daños reclamados por concepto de daño emergente y desvalorización comercial del vehículo, no cumpliéndose con los requisitos de la responsabilidad extracontractual.

Agregó que, en el ámbito de la responsabilidad extracontractual debe existir un daño que sea causalmente imputado a un hecho atribuible a culpa o dolo y es carga procesal de la parte demandante describir el estándar de conducta exigible a su parte y desarrollar fundadamente en qué consistió una supuesta negligencia en un caso concreto como para no haber alcanzado el estándar requerido y la causalidad adecuada que exista entre dicho actuar y los presuntos daños reclamados. Nada de eso existe en este libelo por lo que carece de objeto, causa y fundamento.

Opuso la excepción de falta de legitimidad pasiva de su parte, para ser demandada en autos, agregando que según se ha definido por la doctrina procesal más autorizada, la legitimación es aquella *“Vinculación que tienen las partes de un proceso concreto con la relación jurídica sustantiva deducida en este, vinculación que habilita a una de ellas para asumir el papel de demandante y que coloca a la otra en la necesidad de asumir la carga de ser demandado. La legitimación en causa señala, pues, si uno de los sujetos es, en el proceso de que se trata, el legítimo activo, el genuino demandante y el otro, el legítimo pasivo, el genuino demandado”*, y que a este respecto no existe antecedente idóneo y fehaciente alguno que acredite la calidad que se invoca en su contra, de manera que la demanda deducida no es apta y no es legitimaria pasiva para ser demandada en autos conforme a lo anteriormente expuesto.



En subsidio de lo anterior, alegó ausencia o inexistencia de responsabilidad civil extracontractual o de cualquier otra de su parte, por no existir nexo causal entre el hecho imputable y el supuesto daño reclamado.

Expuso que para encontrarnos frente a la responsabilidad civil extracontractual, deben concurrir diversos elementos, a saber y en primer término i) la existencia de un hecho culpable o doloso; ii) el daño; iii) relación de causalidad entre ambos elementos y la capacidad delictual, todos los que corresponde probar al actor, atendido lo establecido en el artículo 1698 del Código Civil, que señala que incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquéllas o ésta.

Señaló que en el caso de marras, no hay relación causal entre el hecho imputado a Ginnia Caracci Maraboli y los supuestos daños reconducibles a la conducta de su parte, que satisfaga los requisitos copulativos de toda responsabilidad extracontractual según lo anotado precedentemente.

Indicó que no existe acción u omisión alguna imputable a su parte y que se encuentre acreditada, y solo se demanda en su calidad de supuesta propietaria del vehículo materia de autos sin que exista antecedente idóneo alguno que acredite dicha circunstancia, agregando que al no haber una conducta reprochable, tampoco se configura la relación de causalidad necesaria para demandar civilmente daños y perjuicios.

Opuso también, la excepción de inoponibilidad respecto de la sentencia infraccional en causa rol N°1931-3-2021 dictada en el Segundo Juzgado de Policía Local de Las Condes en contra de Ginnia Céspedes Caracci, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 29 de la ley 18.287, que señala: *“Regirá respecto de los procesos por faltas o contravenciones lo dispuesto en los artículos 174° a 180°, inclusive, del Código de Procedimiento Civil, en cuanto les fueren aplicables. Sin embargo, la sentencia condenatoria no surtirá sus efectos respecto del tercero civilmente responsable que no hubiere tomado conocimiento de la denuncia o querella seguida ante el Juez de Policía Local por notificación efectuada en conformidad con el artículo 8°, antes de la dictación de la sentencia.”*

Señaló que niega y controvierte expresamente los perjuicios demandados, tanto en su existencia, extensión, naturaleza y monto. A este



respecto, expuso que el monto total demandado de \$ 7.000.000.- (siete millones de pesos) por concepto de daño emergente, carece de fundamentación, objeto y causa sin perjuicio de la excepción de falta de legitimidad pasiva alegada y que no existe hecho ilícito imputable en su contra.

Solicitó que, no existiendo relación de causa y efecto entre los presuntos hechos y el supuesto daño reclamado ni legitimidad pasiva para ser demandada en autos, debe ser absuelta de toda suma indemnizatoria y, ante el hecho improbable que se estime responsabilidad de su parte, que se rebaje el monto a indemnizar en consideración a lo elevado del mismo al corresponderse a los montos otorgados en casos similares por nuestra jurisprudencia nacional.

Respecto de las excepciones opuestas, se confirió traslado al demandante, quien solicitó el rechazo de las mismas, señalando lo siguiente:

En cuanto falta de legitimación pasiva, señaló que ella carece de todo fundamento, por cuanto doña Ginnia Caracci Marabolí ha sido demandada en su doble calidad de responsable infraccional, condenada por sentencia ejecutoriada, del 2º Juzgado de Policía Local de Las Condes y, además, en su calidad de propietaria del automóvil que conducía placa patente FCDW.67.

Respecto de la excepción de inoponibilidad del artículo 29 de la Ley N°18.287, también carece de todo fundamento por cuanto además la Sra. Ginnia Caracci Marabolí fue emplazada ante el 2º Juzgado de Policía Local de Las Condes, por lo tanto no concurren los presupuestos exigidos por dicha norma legal. Hizo presente, además, que en la contestación de la demanda, al oponer esta excepción, se incurre en un error en la individualización de la demandada señalándola como Ginnia Céspedes Caracci, en circunstancias que su nombre Ginnia Caracci Marabolí.

El tribunal dejó para definitiva la resolución de dichas excepciones.

Se efectuó el llamado a conciliación, la que no se produjo.

Acto seguido, se recibió la causa a prueba, fijándose como hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos:



1) Efectividad de haberse producido el día 18 de noviembre del año 2020, en calle Alonso de Camargo con la intersección de calle Alhué, un accidente de tránsito consistente en la colisión entre el automóvil placa patente FRDV.70 y el automóvil placa patente FCDW.67. Antecedentes y circunstancias que lo acrediten.

2) Estado de tramitación del proceso infraccional seguido ante el 2° Juzgado de Policía Local de Las Condes, causa rol N°1931-3-2021.

3) Existencia, origen, naturaleza y monto de los perjuicios demandados.

Mediante resolución de 10 de febrero de 2022 se citó a las partes a oír sentencia.

Considerando:

Primero: Que compareció doña **Myriam Margarita Velásquez Melo**, matrona, quien dedujo demanda en juicio sumario de indemnización de perjuicios del artículo 9° de la ley 18.287, en contra de doña **Ginnia Caracci Maraboli**, en su doble calidad de responsable infraccional del accidente de tránsito y de propietaria del automóvil placa patente única FCDW.67, solicitando, solicitando las pretensiones ya expresadas en la parte expositiva de esta sentencia.

Segundo: Que ambas partes comparecieron a la audiencia de estilo, oponiendo la demandada las excepciones de falta de legitimidad pasiva y de inoponibilidad, contestando, además, la demanda en los términos señalados en lo expositivo de este fallo.

Tercero: Que la carga de la prueba se puede definir como la necesidad de las partes de probar los hechos que constituyen el supuesto fáctico de la norma jurídica que invocan a su favor a riesgo de obtener una resolución desfavorable a sus pretensiones y resistencias.

Conforme lo antes expuesto, el ordenamiento positivo nacional regula el *onus probandi* en el artículo 1698 del Código Civil, al señalar que: *“Incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquéllas o ésta”*.

Cuarto: Que, para acreditar los presupuestos de la pretensión contenida en la demanda, la actora acompañó la siguiente prueba instrumental no objetada de contrario:



1. Informe técnico pericial estructural mecánico privado, evacuado por don **Dante Bandelli Agostini**, perito judicial, quien inspeccionó y examinó el automóvil placa patente FRDV.70, y determinó que el valor de las reparaciones de los daños del citado vehículo, en el accidente del tránsito fundante de la demanda de autos, asciende a la suma de \$6.223.700.-

2. Carátula de ingreso de la causa Rol N°1931-3-2021, del Segundo Juzgado de Policía Local de Las Condes.

3. Denuncia de accidente de tránsito, de fecha 25 de febrero de 2021, interpuesta por Pedro Javier Velasco Palma, abogado, en representación de Seguros Generales Suramericana S.A.

4. Certificado de inscripción y anotaciones vigentes en el Registro de Vehículos Motorizados del Servicio de Registro Civil, correspondiente al automóvil placa patente FCDW.67-K, en el que consta que, a la fecha del accidente del tránsito fundante de la demanda de autos, 18 de noviembre de 2020, su propietaria era la demandada del presente juicio, doña Ginnia Caracci Marabolí.

5. Certificado de inscripción y anotaciones vigentes en el Registro de Vehículos Motorizados del Servicio de Registro Civil, correspondiente al automóvil placa patente FRDV.70-3, en el que consta que, a la fecha del accidente del tránsito fundante de la demanda de autos, 18 de noviembre de 2020, su propietaria era la demandante del presente juicio, doña Myriam Margarita Velásquez Melo.

6. Declaración indagatoria de fecha 28 de abril de 2021, de doña Ginnia Caracci Marabolí.

7. Parte policial emitido por la 47ª Comisaría de Carabineros de Los Dominicos, de fecha 18 de noviembre de 2020.

8. Declaración indagatoria de doña Myriam Margarita Velásquez Melo, de fecha 11 de junio de 2021.

9. Informe emitido por don Javier Sandoval Pérez, Jefe Departamento de Ingeniería Dirección de Tránsito de Las Condes, que incluye croquis con la señalización, demarcación, número de pistas y sentidos de tránsito, existente de calle Alonso de Camargo con Alhué, de acuerdo a catastro el día 18 de noviembre de 2020.

10. Acta de comparendo de estilo, de fecha 22 de julio de 2021.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: LXBDXCJHVJX

11. Patrocinio y poder conferido por Ginnia Fernanda Céspedes Caracci a los abogados Pedro Javier Velasco Palma y Juan Enrique Oñate Campos, con fecha 30 de julio de 2021.

12. Informe de alcoholemia de Myriam Margarita Velásquez Melo.

13. Patrocinio y poder conferido por Ginnia Caracci Marabolí a los abogados Pedro Javier Velasco Palma y Juan Enrique Oñate Campos, con fecha 9 de agosto de 2021.

14. Informe de alcoholemia de Ginnia Fernanda Céspedes Caracci.

15. Imágenes obtenidas de Google maps, de la intersección de calles Alhué con Alonso de Camargo.

16. Declaración indagatoria de doña Ginnia Fernanda Céspedes Caracci, de fecha 27 de agosto de 2021

17. Sentencia definitiva, de fecha 20 de septiembre de 2021.

18. Notificación de la sentencia definitiva al abogado don Pedro Velasco, con fecha 17 de noviembre de 2021.

19. Certificado de fecha 3 de diciembre de 2021, que la sentencia definitiva de fojas 71 y siguientes se encuentra ejecutoriada, extendido por doña Patricia Berkhoff Rodríguez, Secretaria (S) del Segundo Juzgado de Policía de Las Condes.

20. Orden de Ingreso Municipal N°15282008, de fecha 28 de diciembre de 2021, en el que consta el pago por Ginnia Fernanda Céspedes Caracci, de la multa a la que fue condenada en la sentencia definitiva.

Quinto: Que asimismo, la actora rindió prueba testifical respecto de 2 testigos, prestando su declaración en estrados don Dante Bandelli Agostini, quien declaró respecto del punto de prueba n°3 lo siguiente: Que la demandante le solicitó un informe técnico para establecer los daños por efectos de un impacto con cuerpo duro en su vehículo marca Suzuki año 2013 placa patente FRDV.70, en virtud del cual realiza una inspección señalando que presenta daños de consideración, los que avalúa en la suma de seis millones doscientos mil y fracción. Agregó que el informe lo realizó el 10 de diciembre de 2020 y que el accidente se produjo el 18 de noviembre de 2020. Ratifica además, el informe pericial que se le presenta y que se encuentra acompañado en autos.



En cuanto al testigo don Ludwing Müller Cáceres, declaró lo siguiente en cuanto al punto n°3 del auto de prueba: Que el día del accidente, él se encontraba en el condominio donde vive doña Myriam y su hijo le indica que su mamá había tenido un accidente en auto a dos cuadras en Alonso de Camargo, por lo que lo acompañó y pudo constatar que el auto estaba chocado en la parte delantera, refiriendo distintos desperfectos sufridos por el vehículo.

Agregó que la demandante estaba conmocionada. Expuso que después de varios días, autorizó el ingreso de una grúa que traía el auto de la demandante y pudo verificar nuevamente los daños que había visualizado el día del accidente. Finalmente, señaló que doña Myriam le comentó que el valor aproximado de la reparación eran más o menos 6 millones de pesos y que del vehículo no recuerda la marca, pero sí señaló su descripción.

Sexto: Que, por su parte, la demandada no rindió medio probatorio alguno en la presente causa.

Séptimo: Que del mérito de la prueba rendida aportada por la demandante, especialmente, de la sentencia dictada por el 2° Juzgado de Policía Local de Las Condes, en causa Rol N°1931-3-2021, se pudo concluir que doña Ginnia Céspedes Caracci el 18 de noviembre de 2020, conducía el vehículo Placa Patente Única FCDW.67 estableciéndose su responsabilidad en los hechos al no respetar a cabalidad lo dispuesto en los artículos 108 inc. 1 y 2 y 140 inc. 1 del Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la ley N° 18.290 de Tránsito, que contemplan las normas sobre conducción en cuanto a seguridad y atención al estado del tránsito, al enfrentar la señal “Pare” en el cruce en que ocurrió el accidente.

Lo importante de esta sentencia es verificar los alcances de los hechos establecidos y, al efecto, el sentenciador determinó que doña Ginnia Céspedes Caracci, incurrió en la infracción que establecen los artículos 108 inc. 1 y 2 y 140 inc. 1 del Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la ley N° 18.290, por lo que se le condenó al pago de una multa de 3 UTM y la suspensión de su licencia de conductor por 30 días, en su calidad de autora y responsable del accidente investigado.



Asimismo, de la referida sentencia se puede verificar que se señaló a la demandada de estos autos, como propietaria del vehículo que conducía su hija, doña Ginnia Céspedes Caracci, el día del accidente.

Octavo: Que teniendo presente los hechos establecidos en la sentencia de la judicatura de Policía Local, queda de manifiesto que la demandante yerra al señalar como responsable directa de los hechos que configuraron el accidente de tránsito a la demandada doña Ginnia Caracci Maraboli, puesto que se determinó en dicha sentencia definitiva ejecutoriada que la responsable del accidente fue su hija, doña Ginnia Céspedes Caracci, lo que en ese sentido, le haría perder legitimación pasiva en relación con la imputación de ser la conductora del vehículo.

Sin embargo, conforme a los antecedentes probatorios acompañados al proceso, es posible determinar que la demandada sí tiene la calidad de propietaria del vehículo involucrado en el accidente al tiempo de ocurrido éste, tal como se señaló en el libelo pretensor. En ese sentido, al imputársele a la demandada una doble calidad procesal en relación con los hechos del juicio, esto es, como conductora y propietaria, en esta última hipótesis es posible subsumir a la demandada y conforme a ella, dotarla de la legitimación pasiva necesaria para ser considerada justa parte en el proceso y atribuirle dicha responsabilidad.

Noveno: Que la responsabilidad extracontractual se encuentra regulada, básicamente, en las disposiciones de los artículos 2314, 2326 y 2329 del Código Civil, normas que precisan y determinan que quien cometió un daño debe repararlo.

La responsabilidad es uno de los principios fundamentales del derecho en general y del derecho civil en particular. En términos generales, se genera la responsabilidad con ocasión de la infracción a una norma, entendiendo por ésta todo precepto jurídico, sea de rango constitucional, legal o reglamentario, y aún de carácter contractual, pues conforme al artículo 1545 del Código Civil, por ende, la infracción normativa no solo incide en normas de carácter general, como ocurre con un precepto legal, por ejemplo, sino también tratándose de normas particulares, como aquellas que tienen su fuente en un acuerdo de voluntades.



Ahora, el presupuesto de la responsabilidad se encuentra en el daño, o dicho de otra manera, en el incumplimiento de un deber que causa daño. Sin daño, no hay responsabilidad civil. El daño es una condición esencial de la responsabilidad patrimonial.

Como bien apunta el profesor Orrego, nuestro Código Civil, adopta como fundamento de la responsabilidad delictual o cuasidelictual, la denominada “doctrina clásica”. Para esta doctrina, el fundamento de la responsabilidad extracontractual está en la culpa del autor, entendida, en términos amplios, como aquella comprensiva tanto de culpa propiamente tal como de dolo. La responsabilidad requiere que el daño sea imputable. No basta sólo con el daño, pues éste podría no ser atribuible a la conducta de un sujeto, o aun en tal caso, podría ocurrir que dicha conducta no haya sido culpable. Por ende, si hay culpabilidad, hay responsabilidad. Se trata de una responsabilidad subjetiva y diversas disposiciones del Código Civil confirman que en esta materia se sigue la doctrina clásica de los artículos 2284, 2319, 2323., 2329 y 2333.

Décimo: Que respecto de la excepción opuesta por la demandada, relacionada con su falta de legitimación pasiva, entendida como un presupuesto procesal de la acción deducida y vinculada con la calidad de justa parte en la relación procesal, hay que precisar que, si bien en la acción se la individualiza como conductora del vehículo que ocasionó el accidente que produjo el daño del que se pretende obtener su responsabilidad, lo cierto es que a la luz de la prueba rendida, en especial la sentencia dictada por el 2° Juzgado de Policía Local de Las Condes, ha quedado establecido que la persona que conducía el vehículo que ocasionó el accidente era la hija de la demandada y no esta última. Sin embargo, de la misma prueba se extrae que la propietaria del vehículo que participó en el accidente era de la demandada y en tal calidad, su legitimación pasiva nace conforme lo establecido en el artículo 169 del D.F.L. N°1 que fija el Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley del Tránsito, norma que establece lo siguiente: *“De las infracciones a los preceptos del tránsito será responsable el conductor del vehículo.*

El conductor, el propietario del vehículo y el tenedor del mismo a cualquier título, a menos que estos últimos acrediten que el vehículo fue



usado contra su voluntad, son solidariamente responsables de los daños o perjuicios que se ocasionen con su uso, sin perjuicio de la responsabilidad de terceros de conformidad a la legislación vigente”.

Conforme a lo anterior, la responsabilidad solidaria del propietario del vehículo en relación con el accidente considerado como hecho causante del daño, emana de la ley y es dicho precepto el que le atribuye indudable legitimación pasiva a la demandada de autos, en dicha calidad, motivo por el cual, la excepción en estudio debe ser desestimada.

Undécimo: Que en cuanto a la excepción de inoponibilidad de la sentencia opuesta por la demandada, la que hizo consistir en lo preceptuado en el artículo 29 de la Ley N°18.287, hay que poner de manifiesto que dicha normativa establece que: *“Regirá respecto de los procesos por faltas o contravenciones lo dispuesto en los artículos 174° a 180°, inclusive, del Código de Procedimiento Civil, en cuanto les fueren aplicables. Sin embargo, la sentencia condenatoria no surtirá sus efectos respecto del tercero civilmente responsable que no hubiere tomado conocimiento de la denuncia o querella seguida ante el Juez de Policía Local por notificación efectuada en conformidad con el artículo 8°, antes de la dictación de la sentencia.”*

El *quid iuris* de dicha resistencia radica, precisamente, en el hecho que la demandada no habría tomado conocimiento de la denuncia o querella seguida ante el Juez de Policía Local que conoció del juicio seguido contra su propia hija y relacionado con el vehículo de su propiedad que también experimentó daños.

Pese a lo dificultoso que sería, para el sentido común más elemental, aceptar la posibilidad que la demandada haya desconocido el juicio y posterior sentencia dictada en la judicatura de Policía Local contra su propia hija, lo cierto es que dicha alegación pierda toda seriedad y fundamento, cuando se analiza la referida sentencia definitiva. En efecto, dicho fallo establece en el párrafo segundo de su parte expositiva, que en la foja 20 rola la declaración indagatoria acompañada por escrito de doña **Ginnia Caracci Maraboli**, quien expuso ser la propietaria del vehículo placa patente FCDW.67, agregando que quien conducía el día de los hechos era su hija doña Ginnia Céspedes Caracci.



Dicha actuación procesal, sin lugar a dudas, no sólo supone el conocimiento explícito de la denuncia incoada contra su hija en los términos que exige el artículo 29 de la Ley N°18.287, sino que puso de relieve que la propia demandada compareció al referido proceso infraccional, que nació por el parte denuncia emitido por Carabineros de Chile y que culminó con la sentencia infraccional que determinó la responsabilidad de la conductora.

Así las cosas, la excepción en estudio violenta flagrantemente la doctrina de los actos propios y la buena fe procesal, desde que articula su defensa señalando no haber tomado conocimiento del juicio de Policía Local, en circunstancias que compareció al proceso y prestó su declaración indagatoria, quedando de manifiesto que esta resistencia sólo tiene por finalidad eludir la responsabilidad solidaria que nació con ocasión del establecimiento de la responsabilidad infraccional y antirreglamentaria de su hija en tanto conductora del vehículo de propiedad de la demandada.

Duodécimo: Que despejadas las resistencias procesales formuladas por la demandada, hay que poner de relieve los efectos jurídicos que producen en el proceso los artículos 178 y 180 del Código de Enjuiciamiento Civil.

La primera de dichas disposiciones establece que: *“En los juicios civiles podrán hacerse valer las sentencias dictadas en un proceso criminal siempre que condenen al procesado”*. La segunda de dichas disposiciones expresa que: *“Siempre que la sentencia criminal produzca cosa juzgada en juicio civil, no será lícito en éste tomar en consideración pruebas o alegaciones incompatibles con lo resuelto en dicha sentencia o con los hechos que le sirvan de necesario fundamento”*.

Es evidente que la sentencia infraccional dictada por la judicatura de Policía Local se subsume dentro de las hipótesis normativas citadas previamente y por ello, los hechos allí establecidos, no pueden ser objeto de cuestionamiento en sede civil.

Así las cosas, se tiene por establecido el hecho infraccional base que da lugar a la responsabilidad extracontractual demandada, producto de la norma de reenvío contenida en el inciso 1° del artículo 29 de la Ley N°18.287 que establece: *“Regirá respecto de los procesos por faltas o*



contravenciones lo dispuesto en los artículos 174° a 180°, inclusive, del Código de Procedimiento Civil, en cuanto les fueren aplicables”.

Décimo tercero: Que, en cuanto a la responsabilidad civil solidaria que se le atribuye a la demandada en la acción deducida, en su calidad de dueña del vehículo que participó en el accidente que ocasionó daños, como ya se indicó, es el inciso 2° del artículo 169 del D.F.L. N°1 del Ministerio de Transportes y del Ministerio de Justicia la norma que determina dicha solidaridad.

Con el objeto de establecer los presupuestos fácticos de dicha solidaridad legal, con el mérito del certificado de inscripción y anotaciones vigentes del vehículo Placa Patente Única FCDW.67, queda establecido que la demandada doña Ginnia Caracci Maraboli, era la propietaria del vehículo conducido por su hija al momento de los hechos infraccionales.

Décimo cuarto: Que establecida la concurrencia de los requisitos que permiten atribuirle responsabilidad solidaria a la demandada, junto con el establecimiento de los hechos culposos que dan origen a la responsabilidad aquiliana, corresponde analizar y determinar la existencia de los daños reclamados y si existe vínculo de causalidad.

En este sentido, el informe técnico pericial estructural mecánico privado, evacuado por don **Dante Bandelli Agostini**, perito judicial, quien inspeccionó y examinó el automóvil placa patente FRDV.70, determinó que el valor de las reparaciones de los daños del citado vehículo, en el accidente del tránsito fundante de la demanda de autos, asciende a la suma de \$6.223.700 por concepto de daños directos y \$500.000 por concepto de desvalorización del mismo.

Atendido a que dicho informe no fue emitido con las solemnidades propias de la prueba pericial, para darle valor procesal en tanto documento probatorio, la demandante provocó que el referido informante concurriera a estrados y declarara como testigo, quien ratificó el contenido del mismo estableciendo que el valor de los daños ascendía a \$6.223.700 por concepto de daño directo y \$500.000 por concepto de desvalorización del vehículo de la demandante.

Dentro de las conclusiones de su informe conviene poner de relieve que estableció: *“a. El Vehículo presentado al reconocimiento se encuentra*



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: LXBDXCJHVJX

sin reparar, por lo que pude observar que presenta huellas imputables a impacto y roce por presiones con cuerpo duro entre el despeje de la carrocería y el semi-chasis del costado derecho hacia la izquierda y parte frontal superior e inferior del conjunto delantero por la presión del impacto descentró y descuadró la carrocería activándose los sensores del sistema Airbag y activando los cojines interiores, además, su sistema eléctrico y motriz se encuentran afectados.

“b. El valor de esas reparaciones incluido I.V.A. a la fecha del accidente asciende a la cantidad de \$6.223.700.- (Seis Millones Doscientos Veintitrés Mil Setecientos Pesos)

“c. Por el estudio y el análisis realizado al vehículo placa única FRDV.70-3, el monto de su desvalorización asciende a la cantidad de \$500.000.- (Quinientos Mil Pesos), por lo ya expuesto anteriormente”.

Dicho informe no fue objetado de contrario y en cuanto a su declaración testifical en juicio, tampoco fue objeto de una incidencia de tacha, motivo por el cual, dicho testimonio se le pondera en los términos del artículo 384 N°1 del Código de Procedimiento Civil, dándosele el valor probatorio de presunción judicial, cuyo mérito probatorio se aprecia conforme al artículo 426 de dicho cuerpo normativo.

En este escenario, teniendo presente que el informante es un perito de la Corte de Apelaciones de Santiago y que en el desarrollo de su informe se aprecia que se realizó un examen exhaustivo del vehículo de la demandante, determinando y acompañando fotografías que dan cuenta y respaldan los daños experimentados con ocasión de la colisión provocada por la hija de la demandada derivados de su conducción antirreglamentaria y culpable, examen del vehículo que se realizó a menos de un mes de ocurrido el accidente, este sentenciador le asignará a su testimonio el valor de plena prueba, por la experticia del informante.

Décimo quinto: Que en cuanto al nexo causal existente entre el hecho ilícito establecido en la sentencia infraccional y los daños determinados anteriormente, con la prueba testifical rendida por don Ludwig Müller Cáceres se tiene por establecido dicho nexo causal. En efecto, este testigo, examinado legalmente y sin tacha, señaló que el día del accidente estaban justo en la Torre en que vive la demandante y el 18 de noviembre



de 2020, aproximadamente a las cinco o cinco y media de la tarde estaba fumigando el primer piso de la torre y bajó el hijo de la demandante quien les pidió permiso para pasar, avisándole que su madre tuvo un accidente en auto a dos cuadras.

Refirió que acompañó al hijo de la demandante y constató los daños producidos al vehículo, como da cuenta su testimonio, dando cuenta, además, de los dolores producidos a la demandante producto del accidente.

Este testimonio, al igual que el anterior, se le ponderará conforme las reglas del artículo 384 N°1 del Código Adjetivo y por ello, se le asignará el valor probatorio de plena prueba en cuanto a tener por establecido el nexo causal del accidente con los daños provocados al móvil de la demandante, desde que dicho testigo presencié directamente el resultado del accidente al poco tiempo de ocurrido, dando cuenta de los daños provocados al vehículo, los que son coincidentes con los establecidos en el informe emitido por el testigo experto anterior, razón por la cual, es posible establecer certeramente que los daños fueron producidos producto del se acogerá la demanda civil de indemnización de perjuicios, condenándose a la demandada a pagar la suma de **\$6.723.700** (seis millones setecientos veintitrés mil setecientos pesos), a título de daños materiales y desvalorización causados al vehículo.

Décimo sexto: Que la suma ordenada pagar en motivo anterior de esta sentencia, se reajustará conforme a la variación del Índice de Precios al Consumidor, por el periodo que media entre el mes anterior al de la notificación de la demanda y el mes anterior al del pago efectivo.

En relación con los intereses, se devengará el corriente para operaciones reajustables, conforme lo establecen los artículos 16 y 19 de la Ley N°18.010, el que se devengará desde la notificación de la demanda y hasta el pago efectivo de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 1557 del Código Civil, en relación con el artículo 1551 N°3 del mismo cuerpo normativo.

Décimo séptimo: Que la demás prueba rendida en nada altera lo que se ha razonado en esta sentencia.

Décimo octavo: Que habiendo resultado vencida la demandada en lo esencial y teniendo presente que la defensa articulada en esta causa



violentó la doctrina de los actos propios, al desconocer su comparecencia al juicio de Policía Local, dicho actuar se encuentra expresamente sancionado en el literal d) del artículo 2° de la Ley N°20.886, motivo por el cual, será condenada en costas.

Por estas consideraciones, normas legales citadas y visto, además, lo dispuesto en los artículos 1698 y 2314 del Código Civil; artículos 144,160, 398 y 437 del Código de Procedimiento Civil, **se decide:**

I. Que **se acoge** la demanda de responsabilidad extracontractual e indemnización de perjuicios deducida por doña **Myriam Margarita Velásquez Melo** en contra de doña **Ginnia Caracci Maraboli**, solo en cuanto se condena a la demandada al pago de la suma de **\$6.723.700.-** (seis millones setecientos veintitrés mil setecientos pesos) a favor de la demandante, más reajustes e intereses, conforme lo establecido en el motivo 16° de esta sentencia;

II. Que **se condena** en costas a la demandada.

Regístrese, notifíquese y archívase en su oportunidad.

Rol N° C-9681-2021.

Pronunciada por don **Patricio Hernández Jara**, Juez Titular.

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 del C.P.C. en **Santiago, diecisiete de noviembre de dos mil veintidós.**



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: LXBDXCJHVJX